

PRÁCTICAS AUTORITARIAS Y
DEMOCRÁTICAS
DE PODER EN EL SALVADOR
—TENDENCIAS EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE—

Eugenia López Velásquez
Universidad de El Salvador
Lopez0eugenia@gmail.com

Recepción: 5 de junio de 2017
Aceptación: 26 de junio de 2017

RESUMEN

Este ensayo presenta una versión corta de un estudio de las tendencias de la cultura política en El Salvador, construido sobre la base de una revisión bibliográfica y fuentes primarias, en el cual se recorre un largo período —de finales de la etapa monárquica hispánica a la historia presente—. Aquí se sustenta que las prácticas de poder en El Salvador de manera recurrente han tendido hacia el autoritarismo, bajo formas jerárquicas y viciadas en el marco de una débil institucionalidad y dentro de un sistema político basado en la práctica de privilegios, desigualdad social, cultural y económica. Atributos formados en una larga data a pesar de los cambios hacia un orden jurídico democrático, construyéndose así una cultura política fuertemente arraigada en la costumbre, lo que no solo se aprecia en las altas esferas del poder, sino también vemos su reproducción en los medianos y pequeños espacios.

Palabras Clave

Cultura política, tradición y cambio, autoritarismo y democracia

ABSTRACT

This essay presents a short version of a study of trends in political culture in El Salvador, built on the basis of a bibliographical review and some primary sources, which runs a long period —from the late Spanish monarchic stage to the present history—. Here it is maintained that the practices of power in El Salvador have recurrently tended towards authoritarianism, under hierarchical forms and vitiated in the framework of a weak institutionalty, and within a political system based on the practice of privileges, social, cultural inequality and economic. Attributes formed in a long time despite the changes towards a democratic legal order, thus building a political culture strongly rooted in custom, which is not only appreciated in the high spheres of power, but also see its reproduction in the middle and small spaces.

Keywords

Political culture, tradition and change, authoritarianism and democracy

PRÁCTICAS AUTORITARIAS Y DEMOCRÁTICAS DE PODER EN EL SALVADOR

—TENDENCIAS EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE—

Eugenia López Velásquez
Universidad de El Salvador
Lopez0eugenia@gmail.com

Introducción

En este texto se sostiene, sobre la base de las evidencias de diversos estudios, que las prácticas de poder en El Salvador -desde la época del dominio de la monarquía española a la actualidad- han tendido hacia formas jerárquicas y autoritarias por parte de poderes económicos y políticos; sostenido esto bajo un régimen estatal frágil basado en una marcada desigualdad social, étnica y económica. Estas tendencias responden a varios componentes que han regido en esta sociedad: 1. Un legado tanto mesoamericano indígena como colonial de sociedades patriarcales muy rígidas y jerarquizadas. 2. Una sociedad colonial étnicamente jerárquica, excluyente, de estratos y clases sociales sumamente polarizadas y muy desiguales y con un sistema político administrativo incipiente, autoritario acostumbrado a inmiscuir en lo público intereses particulares. 3. Un sistema político republicano en el siglo XIX y XX de instituciones estatales elementales y débiles, lo que condujo a que la burocracia del Estado fuese sustituida comúnmente por las prácticas bajo intereses personales y de grupos. 4. Un débil ideario jurídico y filosófico entre

los políticos de mayor peso y un bajo nivel educativo de la sociedad, lo cual incidió a que se actúe fuera de preceptos éticos, filosóficos y de teorías de Estados democráticos. 5. Un sentimiento e ideario nacionalista excluyente de lo indígena y lo ladino (mulatos, mestizos e indígenas ladinizados pobres) y, por lo mismo, débil, con elementos racistas y con una visión de lo que es la nación —elitista—: de extranjeros, criollos, mestizos, ladinos y mulatos con poder económico y político.

La cultura política colonial y decimonónica

El tránsito de la época monárquica a la era republicana fue el paso de una sociedad de estructura social, política y económica de antiguo régimen con ciertos visos de Ilustración en sus últimos años hacia un régimen jurídico republicano y constitucional; no fue un cambio radical, mucho de lo anterior persistió, entre variados aspectos de la sociedad, la cultura política con rasgos de autoritarismo.

Durante la colonia, el ejercicio del poder y las competencias de los burócratas se sustentó en estructuras de intermediación de intereses en las que los grupos de interés promovían sus intereses personales y de grupo bajo un sistema de negocios, intercambios, de privilegios, de clientela y de negociación; así era habitual la mezcla de los intereses públicos y los intereses particulares. También prevaleció la exclusión, el menosprecio racial y cultural, particularmente hacia los indígenas, ladinos y mulatos pobres, no sólo en los niveles del poder, también lo hubo en el seno de la sociedad; lo cual fue un componente importante en la cultura política que se cimentó en el siglo XIX.

La sociedad colonial y decimonónica también tuvo como base a la familia patriarcal y autoritaria. Fue práctica en las relaciones jerárquicas al interior del mundo familiar los duros castigos, los que fueron vistos como una regla sinónimo de corrección. Estas prácticas de control y sometimiento también se observaron en las relaciones laborales agrícolas para disciplinar a los peones, a quienes se les azotaba, engrillaba o encarcelaba regularmente.

Por otra parte, el nuevo sistema político promovido por comerciantes, burócratas e intelectuales con poder político y económico tuvo asiento en un fuerte sentimiento localista y de autogobierno. Por ejemplo, a los habitantes de San Salvador les contrariaba que el gobierno provincial dependiera en mucho del poder superior asentado en la ciudad de Guatemala, tensiones que fueron determinantes; tales posiciones —más la falta de consenso político y la falta de la conciliación de intereses nacionales y de grupos— llevaron al fracaso a la unión centroamericana de estos años.

Las nuevas doctrinas económicas y políticas del liberalismo económico, racionalismo e ilustración que fueron útiles a los salvadoreños para el cuestionamiento del poder colonial asentado en la ciudad de Guatemala¹, también fueron útiles para construir el nuevo poder político y económico del siglo XIX basado como en la época del colonialismo español en grupos de intereses que actuaban en estructuras de intermediación para mantener equilibrios de poderes en el marco de débiles instituciones político administrativas débiles. Los grupos de poder salvadoreños no eran homogéneos, ni nunca lo han sido; durante esos años estaban compuestos de familias asentadas no solo en la ciudad de San Salvador, también se encontraban en San Miguel, Santa Ana, Metapán, San Vicente y en otras localidades. Comúnmente, estos grupos familiares de comerciantes y cosecheros de añil asumieron los cargos civiles y religiosos en sus ámbitos, eran miembros de los ayuntamientos, subdelegados de partidos y párrocos. Los de San Salvador destacaban por ser los más numerosos y, en cierto modo, con mayores privilegios por estar asentados en la capital. Muchos de ellos eran descendientes de familias criollas y, otros, de origen mestizo y ladino. Con el tiempo, a estos grupos de poder se les fueron sumando los inmigrantes, hombres inmigrantes que a través de alianzas familiares, capital o experticia en los negocios lograron integrarse a las esferas del poder.

1 Hugo López, «De la integración centroamericana a la creación de la Superintendencia de la Competencia», en *Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador*, coord. Eugenia López Velásquez y Pedro Escalante Arce (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2008), 17-33.

Muchos de los inmigrantes fueron hombres jóvenes solteros. El primero de éxito que se conoce fue Robert Parker, un comerciante inglés que peleó a la par de Cochrane en Suramérica, a quien para 1826 ya se le consideraba una de las personas más influyentes en asuntos de política, guerra y negocios. Otro inmigrante de éxito de los primeros tiempos fue Maurice Duke, un británico nacido en Jamaica², quien al final del siglo XIX fundó un banco, y de quien algunos de sus descendientes actualmente son parte de los grupos de poder económicos más importantes. Otros emigrantes que llegaron antes de que mediara el siglo fueron los Álvarez, ellos provenían de Colombia y se radicaron en Santa Ana para invertir en el cultivo del café, aprovechando su experiencia en ese negocio.

Los extranjeros fueron bienvenidos siempre y cuando llegaran con capitales o habilidades; algunos llegaron con carreras exitosas. En 1867 llegó William Kelly un comerciante inglés que firmó un contrato con el gobierno para fundar un banco, aunque la empresa de Kelly fracasó.³

Al final de la década de los 70, los nuevos inmigrantes y grandes comerciantes junto con los agricultores tradicionales se habían convertido en cafetaleros exitosos. La integración económica de las antiguas familias propietarias y los nuevos personeros del negocio sentó las bases de cierta fortaleza y unidad que llevó a que los grupos de poder salvadoreños consolidaran sus proyectos un poco más, y entre 1880 y 1920, años en los que hubo una nueva corriente migratoria, esta vez en su mayoría de origen árabes, quienes comúnmente arribaron en grupo familiar, con el tiempo se integraron a los grupos de poder ya establecidos que compartieron intereses empresariales, quienes participaban en la política presionando o incidiendo en las decisiones de las autoridades. Así, prácticamente, quedó configurada la composición de clase dominante en El Salvador. Lo interesante fue que dentro de esa amalgama cultural y de prácticas como empresarios, la cultura predominante fue la de grupos tradicionales de origen colonial; los inmigrantes adoptaron muy bien el autoritarismo, los privilegios fiscales y sociales y, mucho más,

2 Héctor Lindo, *La economía de El Salvador en el siglo XIX* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 2002), 297.

3 Héctor Lindo, *La economía de El Salvador en el siglo XIX*, 266.

el trato negrero y abusador a los trabajadores asalariados de sus negocios agrícolas y urbanos.

Tensiones y revueltas campesinas por el poder político y la tierra

La pérdida de sus tierras por motivos del trato coercitivo adentro de las relaciones laborales fue causa de conflictos recurrentes. Pero también ocurrieron tensiones en los pueblos por conflictos entre los barrios de indios y de ladinos, propietarios o no propietarios de parcelas de tierras. En el caso de las tierras controladas por indígenas, estos excluían en el uso de tierras a los ladinos y cuando lo hacían se les cobraba a los ladinos arrendamientos muy altos, lo mismo sucedía a la inversa. Las pugnas entre indígenas y ladinos fueron permanentes,⁴ los ladinos arrebataban las tierras a los indígenas (sobre todo las que estaban abandonadas) y cuando las arrendaban comúnmente no pagaban los arriendos. Estas prácticas fueron originadas en el mundo rural colonial y continuaron durante el siglo XIX; entre otras, hubo sublevaciones indígenas a causa del rechazo de estos pueblos a cualquier pretensión de personas no indígenas a controlar la tierra.⁵ Entre 1844 y 1848, estallaron protestas contra el presidente Malespín en Santiago Nonualco, Cojutepeque, San Vicente, Sensuntepeque y San Salvador, y se dieron acciones violentas entre los indígenas de Santiago Nonualco y San Pedro Nonualco por el control de sus tierras,⁶ así como también por las cargas fiscales y la leva obligatoria.

También se dirimían constantes tensiones al interior de las tierras comunales, puesto que dentro de ese régimen no existían precisamente formas democráticas en el uso y producto de la tierra. Las comunales o ejidales eran tierras que estaban controladas y administradas por hombres mayores y adinerados del pueblo, quienes permanecían administrando las tierras no

4 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 1999), 90.

5 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 177.

6 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 183.

siempre en beneficio de todos; generalmente, estos mismos administradores asumieron otros cargos locales gracias a que el gobierno municipal o nacional —a través de los gobernadores— intervenía en las elecciones de cabildos imponiendo a una camarilla de indígenas o ladinos en el poder local que garantizara relaciones leales hacia la burocracia, y que muchas veces, a su vez, actuaban de forma desleal frente a los intereses de sus pueblos, en ocasiones bajo presión, intimidación, amenaza, o por lo contrario bajo relaciones de cooperación o de intercambio de intereses.

Esas alianzas o presiones eran útiles a las municipalidades y a los gobernadores departamentales para situaciones diversas: por ejemplo, para que fueran eficientes en la recaudación de contribuciones fiscales, actividad que recaía en la figura del alcalde de indios o de ladinos. Ese sistema clientelar también era sostenido gracias al sistema jerárquico, de privilegios, de clase, de edad y de género e incluso gracias al poder de la iglesia con su discurso de sometimiento. Aunque sabemos que ante la actitud despótica de estas camarillas se dieron muchos motines de población rural; esta práctica no era nueva, durante todo el periodo colonial hubo alzamientos indígenas por imposición de autoridades, abuso de poder, problemas de tierras y cargas fiscales.

Otra causa de levantamientos fue el sistema laboral de peonaje por deudas, un sistema que no fue exclusivo de El Salvador, sino que tuvo una dimensión latinoamericana; se reprodujo a propósito de la expansión del mercado mundial y fue un sistema que dio continuación a formas laborales asalariadas iniciadas en la época colonial. El trabajo forzoso funcionó a través de la aplicación de la violencia represiva y en respuesta a esta la violencia colectiva de los pueblos.

Muchas de las rebeliones y protestas indígenas, durante los primeros setenta y cinco años del siglo, fueron apoyadas o aprovechadas por los políticos en función de sus objetivos de grupo o individuales. También los indígenas aprovecharon para hacer alianzas y obtener ventajas.

Lo anterior muestra que los pequeños propietarios indígenas y ladinos también ejercieron poder político no solo con violencia, también lo hicieron con alianzas y acuerdos con caudillos locales y nacionales. Se rebe-

laron o amenazaron con rebelarse, para asegurarse que sus demandas fueran escuchadas. Esto da cuenta que desde los sectores de campesinos pobres e indígenas hubo participación activa en la política y jugaron un papel clave en el drama político del siglo XIX, interviniendo activamente en las transformaciones políticas.⁷

Políticas públicas de un estado débil y la Revolución Liberal

Los años que transcurrieron antes de la década de 1870 fueron para toda América Latina de mucha inestabilidad, de escasa integración a la economía mundial y de muy poca integración interna en cada nación, aunque no hay duda que era una mejor época a las décadas que continuaron después de las Independencias de España. De nada de esto se escapó Centroamérica y, en particular El Salvador, esas fueron sus tendencias al menos hasta el tercer cuarto de siglo. Para esa época, en El Salvador los grupos en el poder económico y político se encontraban mucho más comprometidos con la promoción y beneficio de sus empresas que por los asuntos de gobierno.⁸ Por consiguiente, el Estado y sus políticas públicas fueron muy débiles, tal situación radicó también y centralmente en el débil ideario político, y en la falta de continuidad de las administraciones.

Otro componente que contribuyó a la tremenda debilidad del Estado de estos años fue la inexistencia de una clara política tributaria, esto también contribuyó a que los grupos más poderosos disminuyeran sus cargas, práctica que desde la época colonial acompañó a los negocios; así, las propiedades, producción o comercio casi estaban exentas de cargas fiscales.⁹ De modo que se había generado un sistema hacendario muy limitado y los gobiernos se esforzaron por aumentar sus ingresos para financiar sus activi-

7 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 12.

8 Patricia Parkman, *Insurrección no violenta en El Salvador* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 2006), 31.

9 Antonio Acosta, «Municipio, Estado y Crisis Económica, El Salvador, 1870-1880. Una contribución al análisis desde las haciendas municipales» *Revista de Indias* n°240 (2007): 380.

dades echando mano de cualquier recurso que fuera políticamente viable, evitando causar molestias a los cafetaleros. Esto nos dice que los liberales de esas últimas décadas del siglo estaban mucho más comprometidos que los anteriores con la promoción del desarrollo económico en beneficio de los empresarios agrícolas que con las bondades del gobierno constitucional como en los años anteriores. Los presidentes continuaron instalándose en el poder por medio de la fuerza militar y gobernaban como autócratas. Ellos impulsaron la llamada Revolución Liberal de 1871, la cual no logró representar una ruptura abrupta de las políticas de Estado ni del modo de hacer política.¹⁰

Durante el último cuarto del siglo XIX y primeras décadas del XX se vieron fortalecidas las transformaciones liberales, esto favoreció a grandes propietarios, pero también a un sector de campesinos que pudo obtener tierras y quienes pertenecieron o hicieron con los grupos de poder político. Para estos años, toda la región centroamericana fue testigo de una importante expansión de la agricultura comercial a través de la producción del café y el banano para su exportación.¹¹

La transformación de la propiedad de la tierra se pudo observar más en las décadas de 1880 y 1890, un período de transición hacia un proyecto centralizador de Estado más eficaz¹², aunque todavía conducido por unas difusas e inestables alianzas políticas entre la fragmentada clase política —militar y sectores de la economía—; todo eso fue complejo y, en cierto modo, desestabilizado por las continuas protestas campesinas y por el intervencionismo de otros países centroamericanos.¹³

Los campesinos afectados por la privatización de la tierra organizaron continuas sublevaciones ante lo que el Estado respondió con un sistema autoritario. Los levantamientos se produjeron en enero de 1885, junio de

10 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 335.

11 James Mahoney, «Liberalismo radical, reformista y frustrado: orígenes de los regímenes en América Central», en *América Latina Hoy* (España: Universidad de Salamanca, 2011), 86.

12 Antonio Acosta, «Municipio, Estado y Crisis Económica, El Salvador, 1870-1880. Una contribución al análisis desde las haciendas municipales», 379.

13 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 337.

1890, abril de 1894, noviembre de 1898 y marzo de 1899. La respuesta de los grandes propietarios fue un sistema autoritario cada vez más represivo. Es sorprendente que la mayor parte del presupuesto nacional se empleara en la adquisición de armas y equipo militar, dejando al Estado al borde de la bancarrota y muchas veces a los empleados públicos sin sueldo,¹⁴ tendencia que el Estado mantuvo durante la mayor parte del siglo XX frente al disminuido presupuesto para los rubros de educación, salud y obras públicas entre otros.

Frente a esa acción de resistencia de los campesinos, se afinó el sistema de vigilancia y control de la población rural incorporando a los mismos campesinos en el sistema represivo (funcionando de manera similar como en la época colonial funcionaban las cuadrillas de Santa Hermandad). Se trataba de grupos de indígenas auxiliares de los subdelegados de partidos para vigilar las buenas costumbres y la laboriosidad de la población; así, los campesinos fueron objetos y sujetos de vigilancia, fueron a la vez victimarios y víctimas de un sistema de control, de «la sutil violencia de la disciplina», y fueron también colaboradores de la red de poder. La colaboración y la resistencia fueron caras de la misma moneda entre los años de 1880 a 1932. El castigo físico hasta entonces había sido ampliamente aceptado y practicado recurrentemente en el seno de la familia, la escuela, la comunidad corporativa y, por supuesto, en el interior de la hacienda y la prisión. Las leyes que regulaban la aplicación de los castigos fueron sustituidas por un código moral informal, el cual sería interiorizado no solo por quienes detentaban el poder, sino también por el resto de la sociedad.¹⁵

En esta dinámica de importantes cambios, no todo dentro de la clase política y económica fue homogéneo —como hemos dicho anteriormente— hubo diferencias como en épocas anteriores. Una importante fue en cuanto a la política de la represión de Zaldívar frente a los alzamientos campesinos. También existió un grupo dentro de la elite con tendencias

14 Rodolfo Cardenal, *El poder eclesiástico en El Salvador 1871-1931* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 2001), 241.

15 Patricia Alvarenga, *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 2006), 11-40.

democratizadoras inspirado en la institucionalidad reinante en los países que ellos consideraban vanguardia del mundo civilizado y del progreso; pero hay que señalar que la idea de democracia que se promovió fue excluyente, en cuanto a los ideales de libertad y democracia puesto que no estaba siquiera en discusión la existencia de derechos cívicos femeninos, sino como privilegios exclusivos de las clases altas y medias masculinas.¹⁶

Una nueva oleada de inmigrantes inversionistas

Durante esos años, la clase propietaria y política se vio fortalecida con nuevos inmigrantes de individuos y grupos familiares, extranjeros que de nueva cuenta aportaron sus habilidades tecnológicas, experiencia empresarial, comercial y su visión para abrir nuevos rubros económicos dirigidos a la industria y lo financiero. Fue una inmigración selectiva, no fue masiva como en otros países de Latinoamérica de esos años. Arribaron de manera individual. Estos inmigrantes se dieron cuenta rápidamente que sus talentos eran rentables y que podrían recibir reconocimiento social en poco tiempo¹⁷ y llegaron a fortalecer a los sectores económicos y, con el tiempo, se convirtieron en empresarios y comerciantes importantes. Muchos de ellos se posesionaron del beneficiado y comercialización del café, y de la incipiente banca.¹⁸

Un grupo particular de inmigrantes fue el árabe, que llegó al país entre 1896 a 1918. Dicha migración árabe a El Salvador fue la más numerosa en el contexto centroamericano, y, a diferencia de las anteriores, ésta fue la primera efectuada en grupos de familias. Según algunos datos, el ingreso fue de 162 personas originarias del Imperio Otomano.¹⁹

16 Patricia Alvarenga, *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*, 47-48.

17 Héctor Lindo, *La economía de El Salvador en el siglo XIX*, 295.

18 Aldo Lauria-Santiago, *Una república agraria*, 218.

19 Oliver Prud'homme, «De Belén a El Salvador: Migración de cristianos-palestinos y sus prácticas comerciales como estrategia de inserción, 1886-1918» en *Poder, actores sociales y conflictividad. El Salvador 1786-1972* (San Salvador: Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte, 2011), 239-272.

De las reformas liberales a la insurrección del 32

Los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX fueron un periodo en el que los sectores económicos consolidaron su poder con relación a las décadas anteriores y ese poder siguió ejerciendo en lo gubernativo, directamente hasta el golpe de Estado del general Maximiliano Hernández Martínez, quien hizo cambios en la forma de hacer política, introduciendo en esta a los militares.

Bajo una cultura autoritaria, los gobernantes continuaron instalándose en el poder por medio de la fuerza militar y de esa forma resolvían las tensiones entre la clase política; así lo muestra el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, en 1913, quien dejó inacabado un proyecto de reformas sociales, dando paso a otro sector dominante de cafetaleros representado en la «dinastía» de Carlos y Jorge Meléndez, y el cuñado de Carlos, Alfonso Quiñonez Molina, grupo que gobernó trece años consecutivos, de 1913 a 1927.

Antes del golpe de Martínez, en 1912, fueron iniciados los esfuerzos hacia el militarismo y la represión, ese año se creó la Guardia Nacional como una fuerza policial rural militarizada; en 1919 se reorganizó la Policía Nacional y se agrandaron las fuerzas armadas. Se establecieron puestos de guardias al interior de las fincas para vigilar y controlar a los trabajadores remunerados y alimentados por los finqueros. También se creó una extensa red de patrullas civiles para vigilar la vida rural, estas no eran antes disciplinados; sin embargo, gracias a ese sistema, el Estado fue capaz de crear gratuitamente y rápidamente una fuerza represiva con presencia en todo el país, además había cuerpos civiles de paramilitares.²⁰

Paralelo a las formas autoritarias de los Meléndez-Quiñonez, por primera vez se creó un sistema de partidos formal, que en la práctica se desarrolló como un sistema electoral antidemocrático y personalista, similar en algunos rasgos al sistema electoral anterior; en realidad, inició con la presidencia de Tomás Regalado (1898-1903), quien llegó al poder por la fuerza,

20 Patricia Alvarenga, *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*, 182.

pero promovió elecciones para la sucesión presidencial próxima. Así, en las elecciones de 1903 —cuando subió al poder el cafetalero Pedro Jesús Escalón (1903-1907)— se inauguró. El voto no era secreto, sino que era inscrito públicamente en un libro llevado en el puesto de votación; los cafetaleros se trasladaban a sus fincas días antes de la elección para organizar la votación de sus empleados y peones, lo mismo hacían los cañeros y otros empresarios. Las elecciones tenían lugar durante el tiempo de la corta de café, lo cual concentraba grandes grupos de trabajadores en las fincas.

Los cafetaleros y cañeros, además de obligar a sus trabajadores a votar por el candidato oficial, forzaban a votar varias veces en las mesas electorales de los pueblos vecinos a las plantaciones. En las elecciones de 1919, por ejemplo, Salvador Sol fue visto con 200 hombres procedentes de su finca en tres pueblos diferentes votando por Jorge Meléndez. Era cosa común que los trabajadores de las fincas, después de votar una primera vez con su capataz a la cabeza, permanecieran merodeando en el parque para luego votar una segunda y tercera vez.²¹

Militarismo y represión

A comienzos de los años 30, hubo un cambio sustancial en la configuración del poder; el general Maximiliano Hernández Martínez —tras un golpe militar— instaló un gobierno castrense, se inauguran así los gobiernos autoritarios militares que se extendieron casi 60 años. Paralelamente, y por primera vez, se desarrolló un movimiento popular muy amplio y más radical, expresándose mucho más en las zonas rurales cafetaleras; simultáneamente, se creó por parte del Estado un sistema represivo de mayor eficiencia que tuvo una culmine expresión en la matanza de 1932.

Con el golpe de Estado a Arturo Araujo (en diciembre de 1931), del cual fue artífice civil Rodolfo Duke Carazo, fue nombrado un Directorio Militar que comenzó a transformar al Estado hacia un Estado autoritario militar, echando mano de militares de capas medias que dieran garantía a los

21 Rodolfo Cardenal, *El poder eclesiástico en El Salvador 1871-1931*, 244.

grupos de poder con los medios que fuesen necesarios para proporcionar la estabilidad política necesaria para la reproducción del capital agrícola y comercial.²²

Movimiento popular

La militarización no fue casual, fue en respuesta a la resistencia cotidiana de la población, la cual tuvo como respuesta mecanismos no solo más complejos, sino también más violentos de control social. El levantamiento de 1932 representa tanto la culminación como el repentino final del proceso de radicalización del campesinado salvadoreño iniciado algunos años atrás, como también el proceso continuo de militarización por parte del Estado.

También en lo urbano, sobre todo en San Salvador, comenzó una incipiente organización artesanal, hubo proliferación de mutuales de artesanos, así como una serie de esfuerzos para unificar este movimiento. Rafael Menjívar contabilizó cuarenta y cinco mutuales en 1918, limitadas no solamente a los artesanos de oficios varios (zapateros, albañiles, carpinteros, tipógrafos y barberos), sino también a trabajadores ferroviarios, empleados de comercio y maestros.

Los Meléndez Quiñonez crearon su propia organización de obreros y campesinos, la Liga Roja, que cuando se convirtió en peligrosa para el gobierno, no se dudó en llevar a cabo represiones masivas. El 25 de diciembre de 1922, la Guardia Nacional y la Policía reprimieron una demostración de mujeres del opositor Partido Constitucional; parte de ese movimiento vinculado a un proyecto democratizador fracasado se radicalizó y generó la creciente ola de agitación que tuvo su punto culminante en el levantamiento de 1932.²³ En el transcurso de unas pocas semanas, los cuerpos militares y de seguridad del Estado oligárquico-militar, el Ejército, la guardia y la Policía Nacional dieron muerte a millares de campesinos, peones agrícolas y trabajadores, la mayor parte de los cuales era indígena. Entre ellos los

22 Patricia Alvarenga, *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*, 73.

23 Adolfo Bonilla, *Tenencia de la tierra y reforma agraria en El Salvador: un análisis histórico* (San Salvador: Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, 2013)

jefes de cofradía o «caciques» Felipe Nerio, de Nahuizalco; José Feliciano Ama, de Izalco; y Timoteo Lúe y «Chico» Sánchez, de Juayúa. A los cuerpos militares se agregaron, desde los primeros días de la sublevación, grupos de campesinos medios, comerciantes rurales, terratenientes, jóvenes burgueses y sectores desclasados que constituyeron —primero en forma espontánea y luego organizada— la llamada «guardia cívica».²⁴

Reformas y militarismo 1930-1979

En este periodo hubo un giro importante en la tendencia del ejercicio del poder hacia una militarización más evidente, un desarrollo importante de las políticas públicas como parte de un reformismo estatal muy debilitado y maniqueo en la práctica, un progreso empresarial industrial y financiero relativo de la elite económica, y se dio la continuidad del poder económico en las instancias del Estado. Estos fueron cambios que transformaron a El Salvador de manera significativa; un periodo que se inaugura con el golpe de Estado dado por el general Maximiliano Hernández Martínez dado al presidente Arturo Araujo.

El gobierno y algunos grupos económicos reconocieron que el levantamiento del 32 tenía origen en las precarias condiciones de los campesinos, ese fue el arranque para que en 1932 se desarrollaran unas reformas que tuvieron el propósito de fortalecer el Estado institucionalmente y en sus políticas públicas; en esta vertiente se desarrolló un programa de mejoramiento social que tuvo dos componentes: uno para la población rural y otro a la población urbana. Esta nueva política comprendió en lo urbano la construcción de viviendas baratas y el rural consistió en el reparto de tierras a campesinos que no tenían, este fue el caso del reparto en el valle de Zapotitán. Se desarrolló también un programa educativo rural para indígenas y

24 Juan Mario Castellanos, *El Salvador 1930-1960. Antecedentes históricos de la guerra civil* (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, 2001), 93.

campesinos para incorporarlos a la «sociedad civilizada».²⁵ Fueron proyectos muy modestos. Solamente se repartieron 300 casas a precios muy bajos y se repartieron tierras pantanosas en las que había que intervenir para volverlas productivas (para lo cual no hubo apoyo); al poco tiempo, casi todas las tierras repartidas fueron vendidas por los campesinos beneficiados, tierras que muchos de los beneficiarios no pudieron utilizar nunca.²⁶

El gobierno de Martínez fue un gobierno que fortaleció el centralismo, a grado tal que el presidente incrementó los poderes tradicionales de la presidencia suprimiendo la autonomía formalmente ejercida por los gobiernos municipales. Los alcaldes municipales pasaron a ser nombrados por el Ejecutivo nacional, de modo que las municipalidades perdieron poder y todos sus ingresos fueron centralizados por el Ejecutivo.²⁷

Después de la caída de Martínez, continuó un nuevo gobierno militar: el de Salvador Castaneda Castro (1945-1948), que también como su antecesor quiso reelegirse, además mantuvo cierta continuidad con la política represora del gobierno del general Maximiliano Martínez dirigida al movimiento de oposición y al movimiento obrero, lo cual generó una crisis; los sectores democráticos de la elite política y económica, de clases medias y de sectores populares urbanos reaccionaron contra este tipo de gobierno. Los militares con tendencia democrática dieron un golpe de Estado con apoyo de intelectuales, universitarios, profesores, sectores populares urbanos y obreros; este episodio fue llamado «La Revolución del 48».

El programa de La Revolución del 48, en su proclama, quiso distanciarse de los dos regímenes militares anteriores y planteó modernizar la economía y establecer un sistema democrático de gobierno. Se estableció un Consejo de Gobierno Revolucionario apoyado por los militares y la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) y se expuso que con el nuevo régimen se rompía con el pasado. Pese a que despertaron

25 Adolfo Bonilla, *Tenencia de la tierra y reforma agraria en El Salvador: un análisis histórico*, 47.

26 Denis Francisco Sevillano Payés, «La política rural de mejoramiento social del general Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del Valle de Zapotitán 1934-1950» (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de El Salvador, 2011).

27 Patricia Parkman, *Insurrección no violenta en El Salvador*, 56.

expectativas, en la práctica el nuevo gobierno no tuvo ningún rasgo democrático, paulatinamente se convirtió en uno monopartidista y autoritario.²⁸ Luego se eligió como presidente al mayor Oscar Osorio, quien había encabezado La Revolución del 48, su elección fue nuevamente bajo una forma de monopartidismo, bajo la bandera del Partido Revolucionario de Unidad Democrática (PRUD).

En el gobierno de Oscar Osorio se estableció una nueva Constitución, la cual se caracterizó por su tendencia modernizante en cuanto a derechos sociales, uno de los más importantes fue el derecho del voto femenino; sin embargo, se continuó la tendencia de regímenes militares autoritarios y de una administración pública dirigida por militares.

La década del sesenta comenzó con un acontecimiento importante situado en un contexto internacional. Se trata del triunfo de la Revolución Cubana. Este hecho relevante para América Latina tuvo influencia en la lucha del movimiento social del país, pero fueron las condiciones internas las que determinaron las luchas sociales de esa época, tal como lo expresa Torres Rivas, que los movimientos sociales de los años 60 ya reflejaban la tensión que provocaban las fuerzas sociales plurales que impulsaban una demanda común por la democracia y mejores condiciones de trabajo y de vida.²⁹

Durante esa década, el autoritarismo continuó en los gobiernos bajo una democracia aparente, sin (siquiera) mostrarse en el plano electoral, puesto que los golpes de Estado fueron una práctica común. Comenzó una nueva estrategia para ganar adeptos al partido oficialista y lograr control en la zona rural donde se había reanudado el movimiento reivindicativo campesino, después de un letargo luego de la matanza del 32. En contrapartida al surgimiento de un nuevo movimiento campesino, el régimen militar creó —a mediados de la década— la Organización Democrática Nacionalista ORDEN, fundada por el coronel José Alberto Medrano. Esta fue una instancia que aterrorizó por muchos años la campaña salvadoreña, ORDEN servía de estructura de reclutamiento en el campo, pero cuando convenía

28 Roberto Turcios, *Autoritarismo y modernización* (San Salvador: Ediciones Tendencias, 1992), 52.

29 Roberto Turcios, *Autoritarismo y modernización*, 177-179.

actuaba como fuerza de choque para agredir grupos cooperativos o sindicalistas. ORDEN, fue una organización legal que sirvió para ejercer control y reprimir zonas rurales a través de un sistema de redes sociales paramilitares entre los mismos campesinos. Este sistema incluía una red de informantes, a los que comúnmente la gente llamó «orejas»: redes que actuaban en los pueblos y cantones en coordinación con los comandantes locales y la Guardia Nacional. También se inició una estrategia de terror con las organizaciones clandestinas de aniquilamiento, tales como la Mano Blanca y los Escuadrones de la Muerte.³⁰

En esas nuevas estrategias de control social incidieron en los círculos de poder del nuevo ambiente que predominaba en la Administración de Estados Unidos de temor de que la Revolución Cubana pudiera encontrar eco y simpatía entre sectores populares del país.³¹

En 1969, se dio un hecho de relevancia y de graves consecuencias para la estabilidad del país, la guerra entre El Salvador y Honduras; como consecuencia hubo una masiva expulsión de salvadoreños que vivían en Honduras, lo cual generó tensión social por la demanda de acceso a la tierra, al trabajo y a la vivienda que hicieron los retornados, una situación que ahondó la crisis social y económica.

En la década del 70, se continuó planteando el compromiso de crear reformas estructurales, particularmente para hacer frente a las crecientes presiones en torno a la tierra y la demanda de la oposición en cuanto al tema de la participación política electoral. Paralelo al incumplimiento de desarrollo de las reformas, la oposición volvió a tomar posicionamiento impulsada por la indignación causada por los fraudulentos procesos electorales de 1972 y 1977. En febrero de 1972, quedó registrado que el coronel Arturo Armando Molina, candidato del Partido de Conciliación Nacional (PCN) había ganado de forma fraudulenta sobre la candidatura del democristiano ingeniero Napoleón Duarte, y representante de la coalición opositora, Unión Nacio-

30 Erik Ching, «El Levantamiento de 1932» en *El Salvador: historia mínima* (San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia, 2011)

31 Ricardo Ribera, «Los Acuerdos de Paz en perspectiva. Valoración histórica veinte años después», *Estudios Centroamericanos* n° 728. Vol. 67 (2012): 77-91.

nal Opositora (UNO) que aglutinaba a clases medias, militares y sectores populares.

En 1979, un grupo de militares descontentos, unos por el desplazamiento que habían sufrido de las camarillas dominantes durante la gestión del general Humberto Romero y otros por la mancha en la reputación de la Fuerza Armada por su participación en fraudes electorales, así como por las promesas incumplidas de realizar reformas sociales y económicas de envergadura, dieron un golpe de Estado³². Además de criticar al gobierno de Carlos Humberto Romero, los golpistas también hicieron referencia a causas más profundas del descontento originadas en las estructuras económicas, sociales y políticas que tradicionalmente habían prevalecido en el país; asimismo, cuestionaron a los sectores conservadores de los grupos de poder resistentes a los tímidos cambios de estructuras impulsadas por los anteriores gobiernos militares.

El nuevo gobierno instaurado en forma de Junta incluyó a los militares y algunos civiles demócratas, entre ellos a Guillermo Ungo, prometió elecciones libres, el fin de la violencia sociopolítica, libertad política y la realización de una reforma agraria.³³ Este proyecto no prosperó a causa de las contradictorias visiones de los militares golpistas, las que (por ejemplo) frenaron el ambicioso proyecto de reforma agraria de 1980,³⁴ pero sobre todo lo que frenó cualquier intento democrático y reformista fue que —a partir de enero de 1980— los militares conservadores retomaron de nuevo el control y, a consecuencia de esto, los civiles integrantes de la Junta y muchos miembros progresistas del Gabinete renunciaron a sus cargos y a los cinco militares golpistas se les forzó a abandonar el país. Después de marzo de ese año, el gobierno quedó al frente del ingeniero Napoleón Duarte, el único civil miembro de la Junta de Gobierno que se mantuvo, poco después se proclamó la Reforma Agraria y, a la vez, se impuso el estado de sitio.

32 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional» en *El Salvador: la República* (San Salvador: Banco Agrícola Comercial, 2000), 569.

33 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 570-571.

34 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 573.

En respuesta a la crisis surgió y se desarrolló, en los 70, un importante movimiento social en el ámbito rural. El campesinado comenzó a crear organizaciones para reclamar derechos sobre tierra y salarios, la lucha campesina fue respaldada por nada menos que por la Conferencia Episcopal Salvadoreña, la cual emitió una carta pastoral (en agosto de 1969) en la que llamaba a los terratenientes a promover una distribución más equitativa de las tierras agrícolas.³⁵

Por parte del gobierno fue atacada la organización campesina. Uno de los hechos que ilustra de manera más dramática el clima de represión que inició fue la masacre realizada por la Guardia Nacional y ORDEN el 29 de noviembre de 1974 en La Cayetana, un cantón del departamento de San Vicente; los campesinos agredidos estaban afiliados a la Federación Cristiana de Campesinos (FECCAS) y el resultado, en esa ocasión, fue de seis campesinos muertos y trece más desaparecidos. Seis meses después, un incidente similar ocurrió en la población de Las Tres Calles, departamento de Usulután. Este fue el comienzo de una década de represión y sistemático terror en el campo, al grado de utilizar estrategias de «tierra arrasada» en las rancherías.

En los centros urbanos igualmente se gestó un importante movimiento social de izquierda. Uno de los sectores que más creció, durante la década del 70, fue el obrero: entre 1966 y 1975 el número de obreros organizados en sindicatos se incrementó, pasó de un poco más de 24 mil miembros hasta llegar a casi 65 mil.

Otros sectores de considerable participación en la lucha popular fueron el estudiantil y el magisterial y, en menor medida, la población de los tugurios. Los estudiantes universitarios y de secundaria no demandaron solamente por sus reivindicaciones, sino también lo hicieron por la situación política y social del país.

Mientras, las organizaciones político-militares de izquierda recién reestructuradas intensificaron su acción, incluyendo la propaganda armada,

35 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República* (San Salvador: Banco Agrícola Comercial, 2000). Tomo II.

bombas a empresas de transportes, energía eléctrica y teléfono, lo mismo que secuestros de funcionarios del gobierno.³⁶

La violencia se extendió a todas partes. Dirigentes sindicales, campesinos y sacerdotes fueron los primeros en ser asesinados, mientras que las sedes de partidos de oposición y medios de comunicación fueron destruidas con bombas. Uno de los primeros casos de párrocos asesinados fue el del jesuita Rutilio Grande, asesinado en Aguilares en marzo de 1977. En respuesta a ese crimen, el nuevo arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, denunció el hecho y, al siguiente mes, una organización clandestina, la Unión Guerrera Blanca (UGB), envió un mensaje a los medios de comunicación conminando a los miembros de la Compañía de Jesús para que abandonaran el país; de lo contrario, los que se quedaran serían ejecutados. Hacia septiembre de 1979, la capital y muchas zonas rurales habían entrado en una situación de casi completa ingobernabilidad.³⁷

La rebelión generalizada a la guerra civil (1979-1992)

Como se ha visto en los párrafos anteriores, en el ejercicio del poder durante el periodo 1931-1979 destaca la función de los militares de carácter imprescindible en el sector público. Se apunta también que en este mismo periodo los militares en el poder asumieron un rol político de institución «árbitro supremo», que comprendía la conservación del orden público y removía a los gobiernos inviables por la fuerza; por lo tanto, dicho sistema no era ni democrático ni constitucional en el sentido estricto de la palabra, más bien se trató de un Estado que pretendió la regulación de las actividades económicas bajo un concepto de propiedad privada sujeto a una función social (nunca bien definida), que mantuvo la exclusión de la izquierda en la vida política por considerarla peligrosa para la seguridad nacional.³⁸ Fueron gobiernos que se sostuvieron sobre la alianza entre una base social y los militares. Por su parte, Torres Rivas señala que durante estos años se dejó ver una violencia

36 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República*, Tomo II.

37 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República*, Tomo II.

38 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República*, Tomo II.

implícita de Estado como una forma de ejercicio del poder, no solo en El Salvador sino también en otros estados centroamericanos, particularmente en Guatemala.³⁹ La violencia de Estado como hemos visto en este recorrido no es asunto nuevo, desde la época colonial la violencia es una práctica inherente del sistema político.

El nuevo proyecto político, el de los militares golpistas, fue el que predominó sobre el de otros miembros de la clase política que añoraban una salida autoritaria y demoledora para el movimiento político de oposición; es decir, retornar a un gobierno militar fuerte como el de Maximiliano Hernández Martínez que sometió militarmente al movimiento social y a toda oposición. El sector económico también estaba dividido, un grupo vinculado a las transnacionales apoyó el golpe,⁴⁰ este sector había surgido vinculado a la agricultura y después de la II Guerra Mundial extendió su capital a actividades comerciales, industriales y financieras produciendo excedentes para invertir en otros rubros. En contrapartida hubo oposición del sector más conservador de la derecha, manifestaron un rotundo rechazo a los nuevos proyectos reformistas como el de la Reforma Agraria, puesto que tenía mucho que perder.⁴¹

La política de estado y los nuevos actores políticos durante la guerra

El más importante cambio en el sistema político, posterior al golpe de Estado de 1979, fue la introducción paulatina de procesos electorales que permitieron sustituir los antiguos esquemas autoritarios dominados por el ejército por unos de mayor apertura y participación, de transparencia electoral y pluralismo ideológico; procesos en los que políticos civiles tendrían participación, se pretendía entonces acabar con el largo régimen militar. Esta nueva

39 Edelberto Torres-Rivas, «El actor popular, los otros, sus ideologías, la violencia» en *Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis de Centroamérica* (Guatemala: F&G Editores, 2011)

40 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 572.

41 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 573.

tendencia tuvo la presión del gobierno de los Estados Unidos; sin embargo, entre 1979 y 1989, a pesar de que confluyeron diferentes tendencias políticas, (tanto civiles como militares) el sistema político se fundamentó en el acuerdo político entre la Democracia Cristiana y el ejército. A partir de los años 80, se observó una nueva composición de la clase política, a raíz de la variada participación de actores que buscaron cambios en el gobierno y en la configuración de los partidos políticos. Así, además de los dos históricos, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Democracia Cristiana (DC), se agregaron Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada por un grupo de civiles y militares de orientación de derecha, y tres partidos pequeños. Luego se agregaría un partido más —Convergencia Democrática— de tendencias democráticas y de izquierda.⁴² En el rubro de la economía se implementaron medidas en beneficio desmedido de los empresarios que apoyaron el proyecto golpista.

Tras la llegada de Duarte al gobierno, en 1984, los grupos de poder allegados a su gobierno demostraron disposición al diálogo con la guerrilla, más allá de la solución militar de la guerra, esto se demostró en los episodios de La Palma y Ayagualo. En esa primera etapa del diálogo no se habló de negociación y, al final, fue un diálogo de sordos. El presidente Duarte insistió en que la nueva realidad del país no ameritaba mayores concesiones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)–Frente Democrático Revolucionario (FDR), sino las que gozaban las demás fuerzas políticas del país dentro del ordenamiento constitucional vigente y, prácticamente, abogaba por una rendición de estos con garantías para la incorporación de los alzados en armas al proceso político. Tal vez el episodio más representativo de este tipo de diálogo fue la reunión frustrada de Sesori (1986), la cual no se pudo concretar porque el pueblo había sido militarizado días antes y durante las reuniones preparatorias no se llegó a ningún acuerdo sobre la agenda o la seguridad de las delegaciones; por tanto, solo Duarte se hizo presente en la localidad desde donde, de cara a los cerros y a viva voz, emplazó a los insurgentes para que bajaran a dialogar.⁴³

42 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 583.

43 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 591.

Al mismo tiempo, Duarte y la Junta en el gobierno desde 1984 lanzaron un plan de contrainsurgencia que consistía en medidas reformistas y medidas militares, así se decretó una reforma agraria y una nacionalización de bancos y, simultáneamente, se impuso el estado de sitio. La intervención de las propiedades sujetas a la reforma agraria y a los bancos privados se realizó como una operación militar, con despliegue de tropas y medidas de fuerza que dejaron muy claro que se inauguraba un nuevo capítulo en la historia del país.⁴⁴

Las elecciones presidenciales de 1989 las ganó el empresario Alfredo Cristiani candidato de ARENA. El partido de derecha se impuso no solo por el desgaste de la Democracia Cristiana, sino también debido a su promesa de iniciar negociaciones con la guerrilla. Se inauguró así una nueva tendencia política de la clase política en el gobierno. Y Convergencia Democrática —que incluía al FDR, aliado político del FMLN— el cual, por primera vez desde el inicio de la guerra civil, participaba en el proceso electoral que también había perdido.

Con Cristiani, las políticas públicas económicas y sociales tuvieron un quiebre radical, pusieron fin a las políticas reformistas planteadas por los gobiernos militares desde 1948 y que las mismas necesidades de la guerra de contrainsurgencia habían mantenido en la década de 1980.⁴⁵ Ese cambio se fundamentó en una política macroeconómica, en función de un nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción del libre mercado; proyecto que fue impulsado por todos los gobernantes que le sucedieron a Cristiani, del partido ARENA, en las administraciones después de la guerra civil. Se retornó y se profundizó la privatización, se hicieron reformas financieras con el objeto de llevar a cabo la privatización de los bancos que habían sido nacionalizados por la Junta Revolucionaria de Gobierno al inicio de la década; se cedieron los fondos de pensiones a administradoras privadas, se privatizaron servicios públicos como ANTEL (telefonía) y las distribuidoras eléctricas. De la misma manera, se eliminó el control estatal del comercio de

44 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República*, Tomo II,

45 Knut Walter, «La apropiación de las verdades» en *El Salvador: la República*, Tomo II.

los principales productos de exportación y se redujeron sustancialmente los aranceles que por tanto tiempo habían protegido a las industrias nacionales de la competencia de la producción internacional.⁴⁶

Para fines de marzo de 1990, la Fuerza Armada se pronunció pública y categóricamente en respaldo de la iniciativa de paz del presidente Cristiani. De hecho, se planteó que la tardanza de la finalización de un conflicto que casi nadie apoyaba al comienzo de la última década del siglo XX fue por las desconfianzas y resentimientos que debieron superarse poco a poco.⁴⁷

En los Acuerdos de Paz firmados en México (enero de 1992) se definió un nuevo rol para la Fuerza Armada. Se acordaron cambios importantes en el sistema judicial y electoral, a partir del cual se crearon el Tribunal Supremo Electoral, para erradicar las prácticas de fraude e irregularidades electorales de antaño; se suprimieron los cuerpos represivos de la Guardia Nacional, Policía Nacional y de Hacienda, y se creó la Policía Nacional Civil, como el cuerpo dedicado a la seguridad pública que operaría fuera del ámbito de las estructuras militares. Asimismo, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución del Ministerio Público con amplias atribuciones para velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos.⁴⁸

En el acuerdo de Chapultepec, el FMLN renunció al poder que le daban las armas y aceptó la existencia de la Fuerza Armada como una institución permanente del Estado salvadoreño, mientras la Fuerza Armada renunció a su poder político y policial que había ejercido desde 1931, además de reconocer el derecho de existencia de la izquierda política. La derecha política y económica tuvo que reconciliarse con la presencia, legal y pública, de una izquierda cuyos planteamientos no siempre resultaban de su agrado.⁴⁹

46 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 640 y 641.

47 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 623 y 625.

48 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 625 y 626.

49 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 628.

Al final de la guerra, el FMLN adaptó su actual credo político abandonando el sostenido al inicio del conflicto; pasó de ser un movimiento con planteamientos revolucionarios a un partido de izquierda comprometido con el sistema democrático pluralista dentro de las normas constitucionales vigentes, sin descartar sus objetivos ambiciosos de cambios sociales. Para el FMLN, el gran reto del país consistió en superar el militarismo de las décadas pasadas y levantar a las mayorías desposeídas mediante la transformación estructural del sistema político, económico y social. El FMLN incluyó la reconciliación y la unidad nacional en democracia, a fin de afianzar la paz y se declaró a favor del diálogo y la concertación.

Periodo de la post guerra y de la transición democrática (1992-2013)

En esta última parte del texto se analiza cómo evolucionó el ejercicio del poder en la etapa de la transición democrática del país, para esto se toma de base la premisa que el control del sistema político ya no se encuentra centralizado en manos de los militares y de los empresarios, es decir ya no es monopolio de un solo grupo social, el poder lo empezaron a compartir con la oposición y con la fuerza beligerante del FMLN durante la guerra civil. A partir de ese giro, nos detendremos a identificar qué cambios y permanencias se perciben en la cultura política que domina en la práctica de los grupos de poder y sus partidos políticos, esto se observará en los cuatro periodos del Ejecutivo en manos de la derecha y en el quinto periodo presidencial y primero de la alianza entre el FMLN y sectores democráticos.

Los Acuerdos de Paz se firmaron el 16 de enero de 1992 y por medio de estos se puso fin a la guerra civil y comenzó un proceso en el que se promovió hacer cambios políticos, sociales y económicos, que en la práctica fueron menos profundos a como se esperaba que fueran; la tendencia en cuanto a políticas públicas más que acercarse a los planteamientos del FMLN cuando este era una fuerza beligerante, se acercaron cada vez más al populismo globalizado y bajo prácticas de poder basadas en la intermediación de intereses de grupo.

Mientras se firmó la paz gobernaba entonces Alfredo Cristiani, quien después de la firma de la Paz continuó su administración bajo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a través del cual pretendía implementar un modelo de desarrollo económico que contribuyera a crear las condiciones para la erradicación paulatina de la extrema pobreza y reducir la participación del Estado en la economía, es decir, se continuaría con el proyecto de la privatización.⁵⁰

Este plan hizo continuismo en la segunda administración de ARENA, la de Armando Calderón Sol (1994-1999), quien en su discurso de propósitos planteó que trataría de hacer de El Salvador un país de propietarios, lograr el mayor grado de participación posible de la población en la toma de decisiones, fortaleciendo aún más los gobiernos municipales y la descentralización de los servicios a cargo del Estado; además planteó generar una base que fomentara la inversión privada local, a fin de elevar los niveles y calidad de vida en todo el territorio. Esa visión de desarrollo estaba articulada con la visión del sector de los poderes económicos, la cual veía solamente que a través del desarrollo industrial y comercial se podría beneficiar a todo el país. Parecía que la clase política tradicional seguía sosteniendo los mismos propósitos de sus gobiernos de antes de los Acuerdos de Paz.

En el tema social, los ofrecimientos del gobierno de Calderón Sol se plasmaron en el «Plan de Desarrollo Social», en el cual se proponían medidas en las áreas de educación, salud y vivienda. Se afirmó durante su gobierno que «para dar vida a los programas sociales y ratificar nuestro compromiso, hemos decidido duplicar el gasto público del área social en los próximos cuatro años, hasta alcanzar un 50% del presupuesto anual», era el año de 1999; pero al examinar la evolución del gasto social se constata que ese ofrecimiento no fue cumplido, puesto que en 1995 el gasto social fue de 24.5 por ciento del presupuesto total; en 1999, el gasto social fue de 25.6 por ciento y, para 1999, se esperaba incrementar el gasto social hasta un 26.6

50 Hugo López, «De la integración centroamericana a la creación de la Superintendencia de la Competencia», 275 y 276.

por ciento.⁵¹ En el área fiscal, ni el gobierno de Cristiani ni el de Armando Calderón Sol obtuvieron una gestión exitosa. Esos gobiernos no fomentaron la disciplina fiscal ni controlaron la evasión fiscal.

Como puede verse, tanto Cristiani como Calderón Sol no hicieron frente seriamente a problemas sociales, pese a sus programas en esa dirección que prometieron. Y es que ninguna de las dos administraciones pudo conciliar el modelo de desarrollo económico impulsado a la luz de los preceptos neoliberales con los propósitos de equidad social con los cuales decían estar comprometidos.

En esas dos primeras administraciones de ARENA, como en las otras dos posteriores, hubo cierta transformación en el discurso ideológico para ajustarse a los nuevos tiempos, lo mismo que en las formas de hacer política, pero también hubo muestras de cierto continuismo del autoritarismo y corrupción poco revelada en las instituciones del Estado y del sistema electoral; por ejemplo, en 1997, el FMLN obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones parlamentarias para aspirar a la presidencia del órgano, aun así quedó relegado cuando ARENA, PCN y PDC llegaron a un acuerdo para turnarse la presidencia de la Asamblea cada año.⁵²

Siguiendo el mismo modelo discursivo de Cristiani y de Calderón Sol, la administración de Francisco Flores (1999-2004) se propuso impulsar desde sus políticas públicas la lucha contra la pobreza, la expansión y la descentralización de los servicios de salud, agua, saneamiento, vivienda y educación; la estabilización del tipo de cambio del colón y la reducción del déficit presupuestario, la concesión de facilidades crediticias a la pequeña y mediana empresa de propiedad nacional y descuentos fiscales para las inversiones productivas extranjeras. Las dos últimas medidas estaban —supuestamente— destinadas a generar puestos de trabajo, en un país donde el desempleo según la tasa oficial era del 7 por ciento y el subempleo afectaba a más de dos terceras partes de la población activa; también se propuso terminar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia, habló de reformar el

51 Hugo López, «De la integración centroamericana a la creación de la Superintendencia de la Competencia», 275 y 276.

52 Knut Walter, «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», 637.

Código Penal para endurecer los castigos y de aumentar la capacidad del sistema de prisiones. Asimismo, prometió un modelo de desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente, vinculado a los procesos de integración comercial con los estados de la región y que salvaguardara y ampliara la estabilidad monetaria y financiera lograda durante la gestión de Calderón Sol. En política social, destacó el plan para «descentralizar el suministro de agua potable, que debía mejorar la calidad y el alcance del servicio básico». Pero como los dos gobiernos anteriores, el de Francisco Flores vio frustrado su proyecto político en muchos de los planes sociales, puesto que esos propósitos en realidad no eran compatibles con los propósitos a los que respondían sus gobiernos. Frente a los proyectos de privatización de esos tres gobiernos hubo resistencia de la población, tal fue el caso del sector salud que salió a las calles a protestar e hizo huelgas en oposición a la privatización de la salud y del sistema de seguridad social.

El siguiente gobierno, el de Antonio Saca (2004–2009) continuó como sus antecesores: desplegando propósitos de políticas de atención a los pobres. Los mismos grupos de poder de su partido lo tildaron de populista y fue señalado de corrupto por parar privatizaciones y negocios millonarios como los que se hacían en la CEL, con contratos que obligaban a comprar energía cara a empresarios privados. Algunos estudios afirman que no es la primera vez en la historia nacional que se produce una rebelión desde las filas del poder político y económico conservadoras contra un poder económico tendido más a los rubros comerciales, industriales y financieros. Sistemáticamente, en periodos pasados se han observado pugnas y tensiones entre los grupos que representan las dos tendencias empresariales definidas en El Salvador.⁵³

Las reformas económicas de la administración de Antonio Saca fueron de orientación global, especialmente aquellos aspectos relacionados con la privatización, la liberalización, la desregulación y la apertura externa. Ello le permitió a los grupos de poder económico mayores espacios de acumula-

53 Alexander Segovia, *Integración real y grupos de poder económico en América Central. Implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región* (San José: Fundación Friedrich Ebert, 2005), 95.

ción a nivel nacional y regional, así como la profundización de la inserción internacional, especialmente con Estados Unidos. En El Salvador, como lo señala Segovia, la orientación general de la reforma económica fue particularmente importante para los grupos de poder económico dado su interés en convertir al país en una plaza financiera y de servicios regional.⁵⁴

Como sabemos, en abril de 2014 se iniciaron acusaciones contra Francisco Flores por apropiación de fondos públicos y lavado de dinero,⁵⁵ por lo cual fue apresado y procesado; por su parte, Antonio Saca fue apresado junto a seis funcionarios de su gabinete el 30 de octubre de 2016, acusado de enriquecimiento ilícito.⁵⁶ Con lo cual en el periodo reciente, comúnmente llamado “la transición de la democracia”, se ha continuado observando en los gobernantes, como en el pasado, prácticas en las que los intereses particulares y de grupo se sobreponen al interés público.

El quinto periodo presidencial de posguerra y transición democrática fue el de Mauricio Funes, (2009-2014), un periodo que comienza en el marco de una crisis financiera mundial (2008-2009), siendo El Salvador uno de los países de América que resintió dicha crisis, reportando la tasa de crecimiento más baja de la región desde 2009. Este periodo presidencial fue el primero de participación del FMLN, partido político que proclamó y reiteró a Mauricio Funes como su candidato presidencial, haciendo fórmula con el miembro de la Comisión Política del Frente: Salvador Sánchez Cerrén. Esa administración gobernó en el marco de la ya larga crisis mundial, y bajo su contexto se planteó gobernar con un plan quinquenal denominado «Plan Anticrisis», con medidas de carácter social; entre estas, crear 100 mil empleos, ofrecer un bono de educación, pensión básica de 50 dólares para 42 mil adultos de la tercera edad; apoyo al pequeño y mediano productor con fertilizantes, semilla mejorada para cultivar maíz, beneficiando a 450 mil agricultores, y un programa de ingresos temporales enfocado a 30 mil desempleados. Otra de las medidas consistió en la entrega de paquetes escolares

54 Alexander Segovia, *Integración real y grupos de poder económico en América Central. Implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región*, 95.

55 *La Prensa Gráfica*, 4 de diciembre de 2015.

56 *El País*, 30 de octubre de 2016.

(uniformes y cuadernos) que beneficiarían a las familias más pobres y a los micro y pequeños empresarios.

A mediados del tercer año de gobierno recomendó a su gabinete la actualización de las metas, puesto que la crisis sobrepasaba el cumplimiento de las metas iniciales y sobrepasaba la capacidad financiera del gobierno. Se estableció una Política Nacional de Protección al Consumidor, generó el subsidio al gas propano focalizado para unos 800 mil hogares del país, suprimiendo el subsidio a las empresas gaseras que se habían establecido en los gobiernos anteriores de ARENA, y que beneficiaban más a las empresas que a la población, además de propiciar el contrabando; en cuanto a vivienda, planteó el programa «Casa para todos» con el objetivo de construir 25 mil viviendas para familias de bajos ingresos, el cual generaría 41,886 empleos directos; los resultados de ese plan de vivienda fueron evaluados por la Cámara Salvadoreña de la Industria (CASALCO) y el Fondo Nacional para la Vivienda como modestos, a causa de falta de políticas de financiamiento para la compra de las viviendas y el exceso de burocracia en el trámite de su obtención.

En el segundo año de gobierno, se creó el Sistema Integrado de Salud que iniciaría en 74 municipios con mayor índice de pobreza, el programa incluye la atención médica a cada hogar empezando por las zonas más pobres y excluidas, a fin de descentralizar la carga hospitalaria de la ciudad de San Salvador. En 2012, la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, declaró que las reformas proyectadas no podrían ser cumplidas completamente a causa de la crisis económica mundial. Por otra parte, se ordenó la suspensión de la explotación minera de Cabañas, luego de los asesinatos de tres activistas que se oponían a esa industria. El gobierno comunicó además superar una deuda ante los lisiados de la guerra, anunciando el pago de unos 19.5 millones de dólares en pensiones para más de 18 mil lisiados y para familiares de soldados y guerrilleros muertos en los combates.

En el cuarto año de mandato, el gobierno inició un plan de austeridad para el Órgano Ejecutivo que permitiría el ahorro de 31 millones de dólares, como una medida ejemplar para estimular a más órganos de gobierno a hacer lo mismo, puesto que los gastos del Estado sobrepasaban los

ingresos. Esta medida fue implementada ante las exigencias de organismos financieros internacionales.

El gobierno de Mauricio Funes fue criticado por los sectores de la derecha como por los de la izquierda. Representantes del poder económico cuestionaron la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia generada en febrero de 2010 por el incremento de policías, ampliación de presidios y controles para evitar que los delincuentes recluidos organicen extorsiones y homicidios desde las cárceles, y por el tema de la tregua entre pandillas; también el FMLN le retiró su apoyo en relación a esa problemática.⁵⁷ Por otro lado, para los grupos de derecha más conservadores no fue aceptable que el gobierno haya reconocido al gobierno de Cuba y se abrieran relaciones diplomáticas y comerciales, como tampoco fue aceptable que se reconociera al Estado de Palestina. Asimismo, el FMLN cuestionó la negativa del gobierno de Funes de adherirse a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA por considerar que no reportaría beneficio para el país.

Para algunos miembros de la clase política de ARENA fue cuestionable que el presidente, en el 18° aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, haya pedido perdón a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil. Armando Calderón Sol expresó: «El Estado jamás debió pedir perdón». Mauricio Funes también pidió perdón por la masacre de El Mozote, perpetuada por el ejército, mientras los militares realizaron un homenaje y declararon héroes a los jefes militares que perpetraron dicha masacre. De nuevo, las elites políticas de derecha más conservadoras, en este caso dentro del ejército, crearon un nuevo mito de heroísmo y victoria sobre la «avanzada comunista», como lo ha hecho de la matanza de Izalco en 1932 de indígenas y campesinos el partido de derecha ARENA.⁵⁸

El continuismo en la corrupción dentro de la administración pública —durante la administración pública de la posguerra y la transición democrática en manos de ARENA— fue un tema que tomó central pre-

57 *El Faro*, 18 de abril de 2013.

58 Roberto Pineda, «El Salvador. Tiburones y delfines de la oligarquía salvadoreña». Disponible en: <https://www.alainet.org/es/active/60884>

ocupación para la administración de Mauricio Funes. En épocas pasadas, la corrupción (en especial los delitos de defraudación, malversación de fondos, peculado y estafa) fue un vicio sistemático de los grupos de poder que participaron en las instancias del Estado, pero por debilidad institucional, falta de contrapesos y por la inexistencia de una cultura de la transparencia nunca fueron investigados y sancionados.

Este estado de impunidad ha dado un giro importante, particularmente en la administración de la alternancia. Por primera vez, la Fiscalía se dedica de manera importante a investigar actuaciones de funcionarios públicos y se iniciaron procesos judiciales a delitos millonarios en los que se vieron involucrados funcionarios públicos del alto nivel y miembros de los más poderosos grupos del poder económico, como es el caso de ex ministro de salud Guillermo Mata, acusado de actos arbitrarios y negociaciones ilícitas; el caso del ex ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, por anticipos millonarios a empresa a cargo de la construcción del bulevar Diego de Olguín (obra insigne del ex presidente Antonio Saca); el caso de CEL-ENEL, de peculado multimillonario en el que se encuentran acusados varios miembros de grupos de poder económico; el caso del ex presidente Flores por la desaparición de diez millones de dólares donados por Taiwán a El Salvador, los cuales estaban destinados para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001 y de los que no hay registros de su ingreso al erario público; y otros casos develados, entre otros el caso peculado del ex presidente Saca y varios de su gabinete.

Pese a las limitaciones y a la reducción de posibilidad de cumplir con las metas, las políticas públicas de ese gobierno fueron mucho más ambiciosas y mucho más exitosas que las de los gobiernos de la derecha. Sin embargo, numerosas medidas sociales emprendidas por el primer gobierno de la alternancia, al finalizar su periodo, entraron en crisis y no tuvieron continuidad en el siguiente periodo. Aunque el gobierno de la alternancia manifestó que se deslindaba de la práctica de poder autoritario del pasado, en la actualidad no deja de estar contaminado. Tal continuidad de autoritarismo no solo se observa en las altas esferas del poder gubernamental; las prácticas antidemocráticas permean otras esferas sociales, el gremialismo y diversos

círculos sociales, tal es caso del sindicalismo ya que uno de los problemas más graves dentro de los gremios de trabajadores son las prácticas antidemocráticas en el sistema electoral de directivas sindicales, problema que también se muestra en la atomización sindical, pues solo en el sector salud existen veintiséis sindicatos.

Consideraciones finales

En un país como El Salvador no basta con que este deje de ser antidemocrático, puesto que la democracia no impide la existencia de grupos de poder, falta también que el país deje de ser desigual y excluyente. No existe una nación que se sostenga en equilibrio que tenga la riqueza concentrada en contraste con la pobreza de las mayorías, puesto que tal relación produce violencia. Tampoco el desarrollo integral del país puede ser posible, si persiste el modelo del sistema político bajo prácticas de exclusión y autoritarismo; tampoco es viable dentro de un modelo de Estado pro empresarial y de libre competencia en oposición a los intereses de las mayorías, tal como han sido los regímenes en El Salvador desde sus orígenes.

Por hoy existen varias problemáticas sociales que ni uno de los gobiernos de la posguerra y ningún partido político ha tomado cartas para incorporarlas en su agenda política, para enfrentarlas a profundidad y disminuir así sus efectos directos y colaterales que impactan negativamente la vida de localidades urbanas y rurales, así como de la vida familiar. Estas problemáticas son el fenómeno migratorio, el desempleo y la violencia pandilleril; tres fenómenos que directa o indirectamente han ocasionado desintegración, deterioro y desestructuración familiar y que impactan de manera importante en la estabilidad socioeconómica del país. Son problemáticas que responden no solo a fenómenos locales, sino también a fenómenos de la relación de los centros y periferias del mundo globalizado actual.

Los grupos de poder político y económico en El Salvador únicamente tras una guerra civil y en el marco de los Acuerdos de Paz han logrado aceptar encaminarse hacia la democracia; aunque ha sido un trayecto un tanto difícil. En la práctica política desde el Estado y partidos políticos ha

pesado mucho más la tradición de la cultura política de grupos de interés, de formas autoritarias, de corrupción y de la imposibilidad de hacer consensos para hacer viable la gobernabilidad. Bajo esa perspectiva este continuará siendo un país que no logra acceder a formas democráticas, excluyentes, muy desiguales y polarizadas, ya que, mientras no se transforme el modelo socioeconómico y político cultural de la sociedad salvadoreña que han permanecido a lo largo de su historia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, Antonio. «Municipio, Estado y crisis económica. El Salvador, 1870-1880. Una contribución al análisis desde las haciendas municipales» *Revista de Indias*, Vol. LXVII (2007)
- Alvarenga, Patricia. *Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2006
- Bonilla, Adolfo. *Tenencia de la tierra y reforma agraria en El Salvador: un análisis histórico*. San Salvador: Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, 2013
- Cardenal, Rodolfo. *El poder eclesiástico en El Salvador 1871-1931*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2001
- Castellanos, Juan Mario. *El Salvador 1930-1960. Antecedentes Históricos de la Guerra Civil*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2001.
- Ching, Erik. «El Levantamiento de 1932». *El Salvador Historia Mínima*. San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia, 2011.
- Lauria-Santiago, Aldo. *Una república agraria*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 1999
- Lindo, Héctor. *La economía de El Salvador en el siglo XIX*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2002
- López, Hugo. «Capítulo 8: de la integración centroamericana a la creación de la Superintendencia de la Competencia», en *Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2008
- Mahoney, James. «Liberalismo radical, reformista y frustrado: orígenes de los regímenes en América Central en América Latina Hoy». España, Universidad de Salamanca, 2011
- Parkman, Patricia. *Insurrección no violenta en El Salvador*. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2006
- Pineda, Roberto. «El Salvador. Tiburones y delfines de la oligarquía salvadoreña». ALAI. América Latina en movimiento, 2013

- Prud'homme, Oliver. «De Belén a El Salvador: Migración de cristianos-palestinos y sus prácticas comerciales como estrategia de inserción, 1886-1918» en *Poder, actores sociales y conflictividad. El Salvador, 1786-1972*. San Salvador: Secretaría de Cultura, 2011
- Ribera, Ricardo. «Los acuerdos de Paz en perspectiva. Valoración histórica veinte años después». *Estudios Centroamericanos*. Vol. 67, n° 728 (2012)
- Segovia, Alexander. *Integración real y grupos de poder económico en América Central. Implicaciones para la democracia y el desarrollo de la región*. San José: Fundación Friedrich Ebert, 2005
- Sevillano Payés, Denis Francisco. «La política rural de mejoramiento social del general Maximiliano Hernández Martínez y la transformación del paisaje geográfico del Valle de Zapotitán 1934-1950». Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de El Salvador, 2011
- Torres-Rivas, Edelberto. «El actor popular, los otros, sus ideologías, la violencia», en *Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis de Centroamérica*. Guatemala: F&G Editores, 2011
- Turcios, Roberto. *Autoritarismo y modernización*. San Salvador: Ediciones Tendencias, 1992
- Walter, Knut. «Reflexiones al final de una era: entre la razón y el espíritu nacional», en *El Salvador: la República*. San Salvador: Banco Agrícola Comercial, 2000, Tomo II.
- _____ (2000) «La apropiación de las verdades», en *El Salvador: la República*. San Salvador: Banco Agrícola Comercial, 2000, Tomo II.